

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA



**“DEBE LLEGARSE A TIEMPO A LOS MUNICIPIOS, POR AIRE, TIERRA O EN CAMIONCITOS”:
EL CAMBIO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA DURANTE EL
GOBIERNO URIBE VÉLEZ (2002-2010)**

ANDRÉS SALAME YARURO BARRIOS

ENSAYO DIPLOMADO COMO OPCION DE GRADO

RODRIGO PEREZ BUENO

Director de Proyecto

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

BOGOTÁ D.C.

AÑO 2012

**“DEBE LLEGARSE A TIEMPO A LOS MUNICIPIOS, POR AIRE, TIERRA O EN CAMIONCITOS”:
EL CAMBIO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA DURANTE EL
GOBIERNO URIBE VÉLEZ (2002-2010)**

ANDRÉS YARURO BARRIOS

INTRODUCCIÓN

En Colombia, las Fuerzas Militares han atravesado por un cambio en su fortalecimiento como institución en las últimas dos décadas. Desde los duros momentos de la lucha contra los carteles del narcotráfico, durante toda la década de 1990, hasta los grandes logros que han debilitado considerablemente la amenaza narcoterrorista en la última década. En todo este proceso, producto de dicho fortalecimiento, en el país se han observado grandes avances; el desmantelamiento parcial de grupos al margen de la ley como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el debilitamiento considerable de organizaciones narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sobre todo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como el desmonte de estructuras del narcotráfico.

Todos estos cambios significativos, producto de la labor de la Fuerza Pública en conjunto, si bien resultan considerables, necesitan de la adaptación de la institución frente a una amenaza que se caracteriza por ser relativamente nueva, dada la manera de cometer sus actividades ilícitas: las bandas criminales emergentes (BACRIM). Para encarar este desafío, las Fuerzas Militares deben reconfigurar sus estrategias con el propósito de neutralizarlas, aunque el fenómeno no es totalmente de naturaleza militar.

De igual forma, dicha adaptación no solo debe responder a la necesidad de enfrentar amenazas específicas, sino también a la necesidad de articular las instituciones con las exigencias que tienen relación con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por tal motivo, y dadas las recientes acusaciones que afectan el grado de legitimidad de las Fuerzas Militares y más específicamente del Ejército, al asumir este un papel central en la defensa nacional, es que parece haber mayor interés en este tema en la política de seguridad que ha planteado la administración Santos. En efecto, en septiembre de 2010 el jefe de la cartera de Defensa anunció la transferencia de recursos a la Fiscalía provenientes del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público para agilizar las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, que se adelantarían por parte de una comisión técnica de alto nivel durante un período no superior a un año (La W, 2010)

A simple vista, puede afirmarse que la gestión del Presidente Álvaro Uribe en el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública fue eficaz. Durante su gobierno (2002-2010), el país vivió un cambio gracias al fortalecimiento institucional de la Fuerza Pública. El Estado hizo presencia en zonas donde el establecimiento de sus instituciones era precario y la fuerza ilegítima era implantada por los grupos al margen de la ley, que sembraban el terror y que cometían atrocidades en contra de la población civil (Velasquez, 2006)

Ahora bien, este fortalecimiento también es producto de las negociaciones que emprendió la administración Pastrana con los Estados Unidos y que dieron por resultado el Plan Colombia. Plan que prepararía el camino para que la Política de Seguridad Democrática fuera correctamente implementada y para que las diferentes operaciones conjuntas con el propósito de golpear las estructuras narcoterroristas tuvieran el éxito y el reconocimiento tanto nacional como internacional. Como resultado de esto último, el grado de legitimidad que hoy tienen las fuerzas militares no es el mismo que tenían durante los años 90 (Velasquez, 2006). El mismo fortalecimiento de todo el Ministerio de Defensa con el aumento del gasto público en seguridad y defensa (GSD), así como el mejoramiento de las garantías para todos sus miembros, han generado todo un ciclo positivo en el que las victorias generan actitudes de mayor confianza de parte de los ciudadanos hacia las fuerzas militares y más ampliamente, hacia el Estado.

Este documento estudia aspectos generales del fortalecimiento del Ejército Nacional de Colombia en el período 2002-2011. Para esto, se plantearán, en primera instancia, los parámetros en virtud de los cuales se evalúa la noción de fortalecimiento. Luego se observará la concepción del fortalecimiento de las Fuerzas Militares a través de su coincidencia con la Política de Seguridad Democrática y la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Enseguida, se analizarán los cambios iniciales que ha suscitado la llegada al poder del presidente Santos para, como cuarto punto, evaluar con todos los elementos esbozados el fortalecimiento institucional del Ejército Nacional a la luz de

indicadores que expresan una mejora en su legitimidad, capacidad¹, y bienestar. Finalmente, se presentarán las conclusiones del trabajo.

1. Conceptos analíticos iniciales

Dentro del Estado, el fortalecimiento de una institución depende de los retos que este tenga. En Colombia, la seguridad y el mismo proceso de construcción estatal han sido constantemente cuestionados dada la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales. Durante la década de 1990, momento en el que las estructuras del narcotráfico y el terrorismo pusieron en duda la capacidad de la Fuerza Pública, se evidenció una debilidad producto de la forma como se daba el gasto público en seguridad y defensa, pero ante todo debido a la carencia de una política que definiera una estrategia clara para enfrentar la amenaza narcoterrorista.

Si bien la constitución de 1991 logró un avance considerable al definir la seguridad en función de la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana, no tenía en cuenta *cómo* obtener logros para hallar tal estabilidad; se tenía claro que lo importante era fortalecer el Estado y su legitimidad –en duda por aquellos tiempos- pero no había claridad acerca de cómo hacer más fuerte el Ejército y lograr mayor coordinación interinstitucional entre las Fuerzas Militares (Cfr. Vargas y García, 2009).

Solo fue con el desarrollo, en primer lugar, de una política coherente que estableciera la manera de reforzar el sector defensa para neutralizar las amenazas a la seguridad y, en segundo, con una estrategia internacional que le permitía a Estados Unidos participar en la solución del conflicto a través de su ayuda militar, que se pudo recuperar la ofensiva estatal, en una época en la que las FARC venía aprovechando un proceso de negociación para fortalecerse, momento en el que el Estado colombiano hacía, ciertamente, lo mismo.

De igual forma, esta definición de una Política de Seguridad que lograría una mayor eficiencia y eficacia, no solo del Ejército, sino de todas las Fuerzas Militares, estableció parámetros claros para trabajar en el fortalecimiento de estas instituciones. Así, la Política

¹ En este trabajo el término “capacidad” se entiende en un sentido mucho más amplio que involucra no solo las capacidades estratégicas, sino el fortalecimiento general de las Fuerzas Militares; pie de fuerza y su composición, y la estructura de sus unidades militares. Por consiguiente, se estima que la capacidad de una Fuerza va más allá de sus equipos y armamentos, e involucra una estrategia a partir de la experiencia. A manera de ejemplo, los éxitos del Ejército dependen, en muchas ocasiones, de la profesionalización de sus efectivos así como de la modernización del mismo.

de Defensa y Seguridad Democrática logró convertirse en una política de Estado² que modernizó las Fuerzas Militares. Durante lo corrido de la administración del presidente Santos, las líneas de acción de tal política no han cambiado radicalmente, pero sí se ha percibido un proceso de ajuste constante a las pautas de fortalecimiento a causa de un escenario en el que las FARC han abandonado su estrategia de repliegue ejecutando acciones con resonancia en la opinión pública propias de la guerra de guerrillas, y en el que se plantea el reto de la continuidad en la lucha contra agrupaciones neo paramilitares, oficialmente denominadas BACRIM.

Objetivo	CT	PP	LD	CD	RC	DN	BN
Política							
PDSD	X	X	X	X	X		
PISDP	X	X	X	X		X	X

Esquema 1. Objetivos estratégicos Política de Seguridad Democrática (PDSD) y Política Integral de Seguridad para la Prosperidad (PISDP). **Fuente:** Elaboración propia. CT: control territorial (desarticulación de grupos al margen de la ley); PP: protección a la población; LD: lucha contra las drogas; CD: capacidad disuasiva; RC: rendición de cuentas; DN: atención oportuna a desastres naturales; B: bienestar de la fuerza pública.

De esta manera, el propósito de este trabajo, en cuanto al método, es establecer los lineamientos generales que se han propuesto desde el año 2003 para la vigorización de las Fuerzas Militares con el propósito de evaluarlos en específico con su puesta en marcha en el Ejército de Colombia. En general, los pilares básicos del fortalecimiento han sido tres: el aumento en el grado de legitimidad y la formación en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las Fuerzas; la garantía del mantenimiento de las capacidades que depende del gasto público asignado al Ministerio de Defensa; y en

²En lo corrido del gobierno actual, lo que puede notarse es que el Ministerio de Defensa sigue utilizando los indicadores de la Política de Seguridad Democrática para evaluar su gestión, incluyendo nuevos. Esto último podría sugerir cierta continuidad de tal política lo que la convertiría en una política de Estado si su esencia se mantiene.

último lugar, en función del segundo, una política de bienestar para el pie de fuerza. Desde luego, en la última década se les ha dado mayores prioridades a unos pilares que a otros, lo que no quiere decir que se haya dejado de lado ninguno de ellos. Por lo tanto, durante el primer gobierno de Uribe lo más importante era aumentar rápidamente la capacidad de las Fuerzas Militares; en el segundo, con la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), se profundizó en el campo específico del bienestar, y lo que se puede entrever con la nueva Política de Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad (PIDSP) es una mayor concentración en los asuntos relacionados con el nivel de legitimidad militar a partir de un mayor trabajo en el área de derechos humanos desde la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PIDHDIH).

Específicamente, la justificación de un análisis del gasto en seguridad y defensa en el segundo pilar, parte del propósito de conocer cómo el gasto influye en la consolidación de las capacidades del Ejército. De hecho, el aumento en el gasto implica un fortalecimiento para las instituciones de seguridad. Así entre los años 2002-2007, el Ejército de Colombia ha vivido una disminución de los soldados regulares por soldados profesionales, que representa no solo un mayor esfuerzo presupuestal sino también un aumento en el nivel de efectividad operacional. De ahí que las operaciones de los últimos años hayan sido exitosas cuando al tiempo se presentó un aumento del 63,3% en personal de fuerzas armadas y un crecimiento del 45% en el número de soldados profesionales, de 34.345 en 2002 a 79.064 en 2007 (Ministerio de Defensa Nacional, 2009). A su vez, este incremento en el gasto también repercute en el hecho de que las acciones dentro de la ofensiva requieren de más presupuesto por concepto de dotación, armamento y equipos, y construcción de infraestructura. (Vargas y García, 2009)

a) Transformaciones en el transcurso de la Política de Seguridad Democrática

Cuando se formuló la PDSD en 2003 ya se tenía claro cómo debía ser la estrategia para atacar al narcoterrorismo. Dicha política estableció cinco objetivos principales que dependían indudablemente del fortalecimiento de toda la fuerza pública. Así, el Gobierno Uribe Vélez propuso una estrategia que orbitaba en torno a: a) la consolidación del control estatal del territorio; b) la protección de la población; c) la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia; d) el mantenimiento de una capacidad disuasiva y e)

transparencia y rendición de cuentas. Estos ítems se dibujan de manera clara en el siguiente esquema:



Esquema 2. Objetivos de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Defensa Nacional.

Estos deberían cumplirse en el marco de seis líneas de acción que involucraban a todas las instituciones estatales a partir de la coordinación, el fortalecimiento, la consolidación, la protección, la cooperación, y la comunicación entre ellas. La política establecía de este modo, propósitos claros acerca del cómo se debería pasar al fortalecimiento de la Fuerzas Militares las cuales, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de defender la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional con la protección a la población civil, deberían desarticular las organizaciones terroristas, proteger la infraestructura de la nación y defender las fronteras, dentro del objetivo fundamental de fortalecer el Estado de Derecho a partir de principios de eficiencia, austeridad, transparencia y juridicidad. (Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia, 2003, p. 38). El fortalecimiento de estas instituciones debería basarse en:

1. El respeto de los derechos humanos para mantener y afianzar su legitimidad.
2. El proceso de profesionalización que debería fortalecerse desde:
 - a. La asignación de mayores recursos para aumentar, recomponer y dar un mejor entrenamiento y movilidad al pie de fuerza.

- b. La destinación de fondos para desarrollar el talento humano y la calidad, el alistamiento y el mantenimiento de los equipos.
 - c. El mejoramiento de los sistemas de recolección, análisis y difusión de la inteligencia, así como un mejor nivel de coordinación para que se operara con inteligencia adecuada y en momento oportuno.
 - d. La continuidad de los programas de capacitación de toda la fuerza pública en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
 - e. La optimización del material estratégico de las fuerzas, para mantener una capacidad disuasiva y garantizar la defensa de la soberanía.
3. La reforma de servicio militar obligatorio a partir del principio de universalidad y la aumento de los soldados campesinos.
 4. El mantenimiento y modernización del equipo estratégico.

La puesta en marcha de la PDSD produjo un cambio definitivo en el escenario estratégico para 2007 en el que se definía como “primera y más importante amenaza a los grupos armados ilegales (GAI), en particular las FARC y el ELN”. Igualmente, se establecía que la desmovilización de las autodefensas había producido el surgimiento de nuevas amenazas como la aparición de bandas criminales que pretenden hacerse con el control de actividades delictivas. En cuanto al narcotráfico, se identificó a los carteles que habían pasado de grandes cultivos a múltiples cultivos pequeños y dispersos y que burlaban la acción de la política antinarcóticos del gobierno. Finalmente, la última amenaza que se tiene en cuenta en este nuevo escenario post- PDSD son las bandas de criminalidad común que practican delitos como el hurto común, a residencias y asalto a entidades bancarias, extorsión, secuestro y homicidio. (Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia, 2007, pp. 23 - 26).

Frente a todos esto, el gobierno tenía el pleno conocimiento de que estas amenazas dejaban claro que existían unos retos constitucionales que eran prioritarios. Se afirmaba así que:

La legitimidad y credibilidad de la Fuerza Pública constituyen su centro de gravedad y son la base de todas sus acciones. Por ello, es necesario realizar reformas estructurales que apunten a fortalecer y elevar los estándares éticos y profesionales, y que redunden en un mayor respeto y protección de los derechos humanos y al mismo tiempo, mantengan el apego a la Constitución y las leyes en todas sus actuaciones.(Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia, 2007, p. 26)

Esta política de consolidación requeriría de mayores inversiones que fortalecieran las capacidades de toda la fuerza pública en las áreas de:

1. Movilidad para aumentar la eficiencia en operaciones de control territorial. A mayor movilidad, mayor cobertura de extensión territorial en menor tiempo. Mayor capacidad de movilidad significa reacción rápida y contundente frente a un ataque o amenaza.
2. Inteligencia para identificar y ubicar amenazas y para proveer oportunamente información para adelantar operaciones.
3. Pie de Fuerza cuyo aumento significaría el control de lugares donde el Estado no llegaba, el abarcamiento de las zonas que controlaban las autodefensas, y aumento en la capacidad de combate en labores de acción integral.
4. Mantenimiento de capacidades estratégicas mediante la extensión de la vida útil de fragatas, submarinos, aviones de combate. Se pretendía la repotenciación y re-equipamiento de este material estratégico y la adquisición de material que complementara el existente.

Pero también se consideraban reformas estructurales con una política de derechos humanos y derecho internacional humanitario, juricidad, modernización (reformas en el sistema de educación y formación en la carrera militar y policial, definición de roles y misiones, rediseño de estructura organizacional del Ministerio de Defensa nacional), fortalecimiento operacional, bienestar (mejora en sistemas de salud, aumento de salarios, y la mejora de condiciones de vida, creación de una holding empresarial).

b) Hacia la Política de Seguridad para la Prosperidad

En el quinto capítulo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” se presenta la estrategia de seguridad de la administración actual “consolidación de la paz”. De esta manera, se tiene en cuenta que la paz parte de la garantía de un Estado de Derecho que brinde seguridad en todo el territorio nacional, que parta de la observancia plena de los derechos humanos, y que ofrezca un funcionamiento eficaz de la justicia. El propósito es entonces desarrollar una estrategia integral desde la conformación de una sinergia que involucre a otras instituciones a parte de la fuerza pública con el propósito de

promover que los adelantos de los últimos años se mantengan y avancen³. Se entiende así que el éxito de la “prosperidad democrática” depende de un fuerte componente de la consolidación de la paz, que a su vez involucra una consolidación de la seguridad mediante cuatro lineamientos estratégicos:

- a. Consolidación y fronteras
- b. Capacidades estratégicas
- c. Seguridad Ciudadana
- d. Lucha contra los grupos armados y el crimen organizado.

Ahora bien, en el desarrollo de la PIDSP, la administración del último gobierno ha partido de seis elementos claves que pretenden evitar la transformación de las organizaciones narcoterroristas y el aumento de las BACRIM y sus actividades delictivas. Dichos elementos son:

- a. Seguridad para la prosperidad
- b. Consolidación de la seguridad y lucha contra Grupos Armados Ilegales.
- c. Lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad.
- d. Defensa y seguridad nacional.
- e. Seguridad y convivencia ciudadana.
- f. Modernización del sector defensa.

Lo anterior mediante el involucramiento de un buen gobierno, garantía a derechos humanos, cooperación internacional, comunicación estratégica, y la coordinación institucional e interinstitucional. Por otro lado, en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la configuración de la PIDSP, los ministros de defensa Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón han esbozado cuatro elementos para avanzar en el fortalecimiento institucional. Los tres primeros son los mismos que se vienen teniendo en cuenta desde la PDSD. En primer lugar, la legitimidad y los derechos humanos quien al respecto afirma:

El eje de gravedad de la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Santos va a ser el respeto y la legitimidad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Eso significa continuar la tarea de avanzar en la adopción de estándares internacionales compatibles con el

³En el mismo capítulo se tiene en cuenta logros del 2003-2010 como la reducción del secuestro extorsivo en un 90%, la reducción de los actos terrorismo en un 80%, y la reducción de acciones subversivas.

Derecho Internacional Humanitario y con las exigencias de derechos humanos en todas las unidades de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. (Rivera, 2011)

En segundo lugar, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares que girará alrededor del financiamiento de la seguridad y el mantenimiento de las capacidades estratégicas. El último de estos tres primeros hace referencia a lo que ya se había enunciado desde la PCSD, esto es, la profundización en la política de bienestar para los integrantes de las Fuerzas Militares. Finalmente, el elemento con el que innova la administración Santos es, sin lugar a dudas, el intento por acelerar los avances en el área de ciencia y tecnología desde el fortalecimiento del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED). Desde luego para evaluar el impacto de este último elemento del fortalecimiento será necesario esperar el paso del tiempo.

2. Análisis del Fortalecimiento Institucional del Ejército de Colombia

Lo estudiado hasta aquí ha hecho patente la continuidad de tres pilares en el fortalecimiento de todas las Fuerzas Militares. Conviene ahora evaluar el impacto de tales elementos en el fortalecimiento de la institucionalidad del Ejército. Por tal motivo, esta última sección se dividirá en tres grandes partes que observan la puesta en marcha de cada uno de ellos, desde la PDSD hasta los primeros meses de gobierno Santos.

a) Legitimidad

Desde el inicio de la PDSD, el desarrollo de este primer pilar fundamental del fortalecimiento institucional no tuvo la profundización que ahora tiene. Si bien se pueden destacar avances a partir de las considerables disminuciones de los indicadores de violaciones a derechos humanos de la PDSD durante el primer cuatrienio de Uribe, no sería sino hasta su segundo mandato que se consolidaría una Política *Integral* de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PIDHDIH). Esto no quiere decir, en ningún sentido, que la PDSD fuera una política que no tenía en cuenta el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sino que la PIDHDIH reforzó los estándares con los que ya se contaban. Desde entonces, se empezó a profundizar en la

instrucción, la disciplina, la defensa, y atención de la Fuerza Pública, así como su cooperación con otras instituciones.

Desde la implementación de la PCSD, pero más específicamente desde la PIDHDIH, las cifras de protección a los derechos humanos se han reducido de manera considerable (véase Tabla 1). Tal política pretendía garantizar el derecho a estar seguro y recibir protección, logrando unas instituciones libres y en funcionamiento permanente. Con esto, se buscaba lograr una reversión del abandono y la desprotección de la sociedad en los territorios donde los grupos armados ilegales ejercían un dominio arbitrario y atentaban sistemáticamente contra los derechos humanos. Así, desde 2007, se puede evidenciar una reducción mucho más profunda en las cifras (véase Gráfico 1)⁴.

Algunos Indicadores de Violaciones a DD.HH.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	ene-11
Homicidio Común	28837	23523	20210	18111	17479	17198	16140	15817	15459	1207
Secuestro	2882	2121	1440	800	687	521	437	213	282	18
Personas Desplazadas	459213	260956	238114	272967	292169	329169	285813	166387	95043	512
victimas minas antipersona [Fuerza Pública]	318	469	605	760	795	692	502	443	269	
victimas minas antipersona [Civiles]	317	281	287	420	453	284	359	307	130	
Total víctimas de minas antipersona	635	750	892	1180	1248	976	861	750	399	

Tabla 1. Reducción en algunos indicadores de violaciones a derechos humanos 2002- Ene-2011. **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa Nacional (2011, pp. 11, 15, 62,65).

⁴En cumplimiento de la protección del derecho a la vida y la integridad física, para el periodo comprendido entre 2002-2009, se puede detectar una disminución del 49 % de los homicidios y una reducción de víctimas de masacres en un 78%.En cuanto a la protección de la libertad y seguridad personal, el mismo periodo muestra un descenso en los homicidio a poblaciones que se han visto expuestas a riesgos excepcionales; así los homicidios a indígenas se redujeron en un 46%, a periodistas en un 82%, a maestros sindicalizados un 85%, y a sindicalistas en un 87%. De igual forma se puede observar que en Colombia disminuyeron los secuestros extorsivos en un 91% durante el periodo en mención. Finalmente, la protección de los derechos políticos se garantiza con una mengua de los homicidios a alcaldes, exalcaldes y concesales en un 87%, lo que deja entrever la revigorización de la democracia en el ámbito local. (Ministerio de Defensa Nacional, 2010d, pp. 6-9)

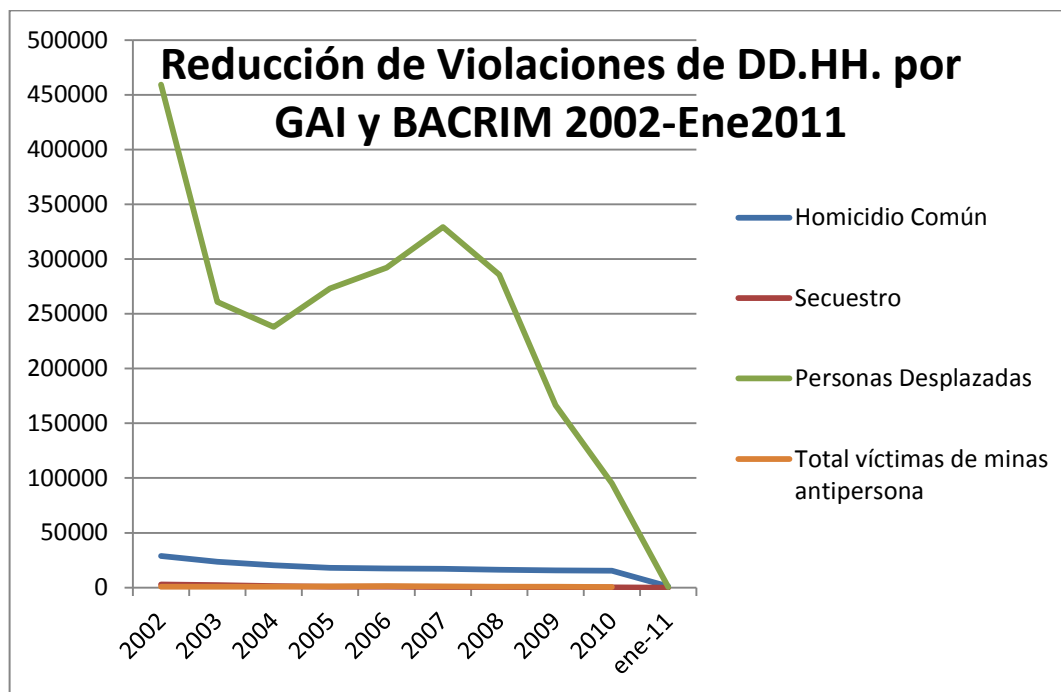


Gráfico 1. Reducción de violaciones a derechos humanos por GAI y BACRIM. **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa Nacional (2011, pp. 11, 15, 62,65).

Aquí es necesario aclarar que los grupos armados ilegales y las BACRIM han sido los principales agentes violadores de los derechos humanos en Colombia (Comision Colombiana de Juristas, 2011), pero con la PCSD, el homicidio, el secuestro, el desplazamiento y las víctimas de minas antipersonales muestran una disminución considerable. El papel del Ejército de Colombia es de vital importancia en tales disminuciones, si se tiene en cuenta que es la institución con mayor número de pie de fuerza, lo que le permite jugar un papel activo fundamental en la ejecución de las políticas de protección de los derechos humanos.

De otro lado, se pueden evidenciar avances adicionales. En materia de *instrucción* el Ejército colombiano ha sido un multiplicador importante en la formación en DD.HH. y DIH, para las demás Fuerzas. La institución cuenta hoy día con alrededor de veinticinco batallones de instrucción y entrenamiento en tácticas, técnicas, y procedimientos operacionales para la aplicación correcta de las Reglas de Encuentro. También, toda la Fuerza Pública posee múltiples convenios en formación con universidades e instituciones enseñanza, así como con batallones de instrucción y entrenamiento para las Fuerzas

Militares, en los que se busca implementar un modelo único pedagógico para la interiorización de las normas de DD.HH. y DIH. Específicamente, el Ejército tiene hoy a su favor una especialización en docencia universitaria, en convenio con la Universidad Piloto de Colombia, que intenta generar un grupo más grande de formadores en derechos. Asimismo, la capacitación coyuntural es importante en el campo de la instrucción, desde 2003 se han capacitado alrededor de 328.217 militares y civiles en estos temas. Pero, entre 2006 y 2009 es donde se puede notar un aumento del 200% en la mencionada enseñanza. Así, para 2009, las Fuerzas Militares obtuvieron un total de 122.507 capacitados.

Además, fue el Ejército quien desarrolló una pista de derechos humanos en la base de Tolomai que se convirtió en un modelo que vienen replicando las demás Fuerzas Militares en cuanto a su metodología. Actualmente, existen alrededor de cuarenta y nueve pistas en los batallones de instrucción y las escuelas de formación en todo el territorio. Finalmente, cabe destacar la puesta en marcha de ejercicios de auto-evaluación en los que se replican los procesos positivos para evitar errores en las operaciones. En 2009, en la segunda y séptima división del Ejército fue donde se desarrollaron dos talleres de lecciones aprendidas (Ministerio de Defensa Nacional, 2010d, pp. 10-12).

En lo que tiene que ver con la *disciplina*, el Ejército se ha beneficiado de medidas generales para las Fuerzas Militares. Al respecto se han creado la Oficina de Doctrina y Asesoría Jurídica (ODAJ) a cargo de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Defensa, el Manual de Derecho Operacional en 2009, los Asesores Jurídicos Operacionales (AJO) de los cuales 126 son únicamente para el Ejército, los Inspectores Delegados (8 para el Ejército), y las Reglas de Encuentro difundidas en todos los niveles. De igual forma, para el fortalecimiento institucional del ejército es importante la reforma a la Justicia Penal Militar que planea implementar el sistema penal acusatorio, mediante sentencia C-460 del 15/Julio/2009 en la que la Corte Constitucional

emitió fallo definitivo respecto de las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por la Presidencia de la República, frente al texto rehecho del artículo 3° del proyecto de ley 144/05 Cámara y 111/2006 Senado por el cual se expide el Código Penal Militar, que se refiere a delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, considerándolo ajustado a la Constitución Política y a las normas de carácter internacional. El Proyecto de Ley que está actualmente para sanción presidencial configura un avance sin precedentes

para delimitar el alcance restrictivo del fuero penal militar en los términos señalados por la jurisprudencia constitucional (Ministerio de Defensa Nacional, 2010d, p. 14)

En esta área es importante también la reforma al régimen disciplinario, mediante ley 836 de 2003, para adecuarlo al derecho operacional, y la ley de inteligencia que

establece límites y fines a las actividades de inteligencia y contrainteligencia; señala expresamente qué organismos adelantan estas actividades; fija como principios la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad; ordena que toda actividad de inteligencia y contrainteligencia esté sustentada en orden o misión de trabajo escrita y emitida por autoridad competente que responde por su contenido; señala que en ningún caso la información puede ser recolectada por razones de pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos; establece que en ningún caso los informes de inteligencia podrán tener valor probatorio dentro de procesos judiciales; ordena la creación de Centros de Protección de Datos para asegurar que la información recopilada se enmarque dentro de la Constitución y los fines que señala la ley; ordena actualizar y depurar los archivos de inteligencia y contrainteligencia y crea controles externos, incluida una comisión parlamentaria, e internos para vigilar el cumplimiento de la ley. (Ministerio de Defensa Nacional, 2010d, p. 15)

En cuanto a la *defensa*, el Ejército así como toda la Fuerza Pública cuenta hoy con la Ley 1224 de 2008 que fija un procedimiento para atender la defensa judicial y disciplinaria de todos sus miembros por hechos no dolosos ni gravemente culposos relacionados con el servicio, que entrará a regir a partir de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar. Otro adelanto aquí son los convenios⁵ para garantizar el derecho de defensa de la Fuerza Pública (p. 16).

No obstante, las cifras arrojadas por Organizaciones No Gubernamentales señalan una realidad que difiere ampliamente de la situación expuesta por las instituciones gubernamentales. Según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), entre julio de 2011 y junio de 2009, fueron atribuidas a la Fuerza Pública 1847 ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, la institución fue acusada de ser la presunta responsable de masacres durante el periodo julio de 2006 – junio de 2007, superando las registradas por las FARC y los grupos paramilitares. De igual forma, los informes de la CCJ resaltan con preocupación que cerca del 60% de desapariciones forzadas fueron ejecutadas por agentes de la Fuerza Pública en el periodo comprendido entre julio de 2005 y julio de 2008.

⁵Adelantados con la Universidad Sergio Arboleda y la Cámara de Asuntos Legales de la ANDI.

Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en su informe titulado *“Falsos positivos: clamor por la verdad y la justicia”* demostró que, pese al compromiso del gobierno de judicializar a los responsables y detener este tipo de acciones que deterioraron la imagen del Ejército Nacional, en 2010 las ejecuciones extrajudiciales aumentaron con respecto a 2009, llegando a 12 casos que involucraron a 23 víctimas. El documento hace hincapié en la identificación de nuevas modalidades de ejecuciones extrajudiciales, como la justificación bajo errores de operación y la presentación de las víctimas como miembros de agrupaciones de delincuencia organizada.

De esta manera, se observa que, a pesar de los intentos gubernamentales por reducir y eliminar las acciones sistemáticas de violación a los Derechos Humanos a través de políticas y programas fundamentados en el rol protector del Ejército, la problemática continúa sin ser controlada. La cuestión del irrespeto de los Derechos Fundamentales fue, sin duda, el lunar de PDSD. Así, el Ejército sigue enfrentándose al reto de recuperar la legitimidad y confianza que se fueron desvaneciendo una vez se conoció responsabilidad de la institución en los casos de ejecuciones extrajudiciales y que, de cualquier forma, se han convertido en obstáculos para vencer a la guerrilla.

En lo que se refiere a la *atención* que intenta adoptar medidas a favor de grupos de población más vulnerable, estos grupos ahora cuentan con directivas elaboradas por el Ministerio de Defensa. Así, se ha desarrollado la Directiva 16 de 2006 que creo 4 oficinas de asuntos indígenas (para Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea); la Directiva 7 de 2007 para fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de los derechos humanos de las comunidades negras, afro-colombianas, raizales y palenqueras; la Directiva 9 de 2005 que establece medidas de prevención y protección, atención humanitaria de emergencia, y estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento; y la Directiva 9 de 2003 en la que se establecen las bases de la protección de los sindicalistas y defensores de DDHH (pp.16-.17).

La *cooperación* con otras entidades del orden nacional e internacional han fortalecido, igualmente, la institucionalidad del Ejército. Dentro de los principales resultados, cabe destacar las relaciones que se han establecido desde la Directiva 10 de 2007 del Ministerio de Defensa Nacional que instituyó la participación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia(OACNUDH) –que ha realizado 21 visitas a las 7 Divisiones del Ejército, donde se han revisado casos que presuntamente

revisten características de homicidios en persona protegida-, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la Fiscalía General de la Nación, y de la Procuraduría para que participen como invitados permanentes en las Reuniones del Comité de Seguimiento a Denuncias por presunto homicidio en persona protegida. Mediante la relación con la OACNUDH se ha intentado acordar el apoyo de Naciones Unidas en la evaluación de algunas líneas estratégicas de la PIDHDIH. “Durante el año 2009, el CICR acompañó dos ejercicios de lecciones aprendidas en la Segunda División (Bucaramanga) y en la Séptima División (Medellín), próximamente se desarrollarán estos ejercicios en las demás Divisiones” (p. 19). Por último, la Fiscalía ha designado un enlace permanente de Policía Judicial para la Unidades Militares con el objetivo de garantizar la preservación de la escena de los hechos y la cadena de Justicia.

Todas estas medidas produjeron resultados positivos. Las cifras de quejas disciplinarias frente al número de miembros, misiones tácticas, y número de capacitaciones de la fuerza pública disminuyeron considerablemente. Pasaron de 972 en 2006 a tan solo 39 para el primer semestre de 2010. (Ministerio de Defensa Nacional, 2010c, pp. 75-78)

El documento “100 Días” del Ministerio de Defensa Nacional recoge los avances en la gestión del Ministro Rodrigo Rivera Salazar. En tal documento, se enuncia como un logro tres acciones de depuración y transparencia (pp. 26-29) desde el 7 de agosto de 2011: la captura de miembros de la Armada por presunta colaboración con “Los Rastrojos”; la captura de varios integrantes de la Fuerza Pública en la Operación Lealtad I (5 de ellos del Ejército) a quienes se les inició proceso penal y disciplinario, así como uno administrativo para la desvinculación inmediata de las Fuerzas⁶; y el caso de los asesinatos de los niños en Tame en el que el Ejército “fue el primero en solicitar intervención de la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido (...)[,] un oficial fue puesto a órdenes de la Fiscalía y 4 oficiales y 3 suboficiales separados del servicio por fallas de mando y control en esa zona.”⁷ (p. 29).

⁶El documento afirma: “De acuerdo a las informaciones recolectadas, la red de apoyo desarticulada proveía de armamento, municiones, explosivos, comunicaciones y material de intendencia a los denominados bloques noroccidental, oriental y sur de la organización terrorista de las Farc. La operación Lealtad 1 se convierte en el más importante golpe asestado por las autoridades, en los últimos años, a las estructuras logísticas y de apoyo de la organización terrorista de las Farc.” (p. 28).

⁷Cabe agregar que: Una vez el Ejército conoció versiones que asociaban a miembros de la institución con este caso y con malos tratos a la población en una vereda del municipio de Tame, Arauca, el Mayor General Alejandro Navas, Comandante del Ejército, ordenó inmediatamente al inspector de la institución, trasladarse a la zona y efectuar la investigación interna correspondiente. Por los avances logrados en la investigación interna, se decidió poner a disposición de la Fiscalía a un oficial de la Brigada Móvil No 5 y separar del servicio por fallas de mando y control en la zona de los hechos, a 4 oficiales y 3 suboficiales. (p. 29)

En pocas palabras, queda claro que las últimas dos administraciones han partido del hecho de que un Ejército fortalecido depende, en gran parte, del aumento en su grado de legitimidad a partir del combate en contra las violaciones de DD.HH. a manos de los grupos al margen de la ley y las BACRIM, y a partir de tanto la generación de medidas que evitan las infracciones a los derechos humanos y el DIH, como desde la promoción de la transparencia de parte de las Fuerzas Militares. Así, la PIDHDIH reforzó los principios que se tenían desde la PDSD, y ha venido configurando gran cantidad de marcos jurídicos y principios dentro del Ejército de Colombia.

b) Capacidades y resultados del Ejército

Un segundo elemento del fortalecimiento institucional hace referencia al fortalecimiento de las capacidades en función del gasto y los resultados que este produce. En el Ejército colombiano el principal efecto del aumento sostenido en el gasto en defensa y seguridad desde el año 2002, ha sido el incremento en el pie de fuerza, en comparación con toda la Fuerza Pública, véase gráfico 2), y la profesionalización que se proponía desde la PDSD. Un Ejército profesionalizado y modernizado se convierte así en una institución fortalecida que produce resultados eficaces y eficientes. De esta forma, se puede establecer una causalidad positiva entre el mejoramiento de la seguridad y el aumento en el gasto de defensa y seguridad⁸.

⁸Un incremento que si bien es sostenido, no es tan exorbitante como suele pensarse. El aumento del gasto en Colombia, según el Ministerio de Defensa Nacional, ha respondido más a necesidades coyunturales, lo que deja entrever la posición no militarista del Estado colombiano, sino la de un Estado que enfrenta una amenaza narcoterrorista. Para profundizar en el debate (véase Ministerio de Defensa Nacional, 2009a)

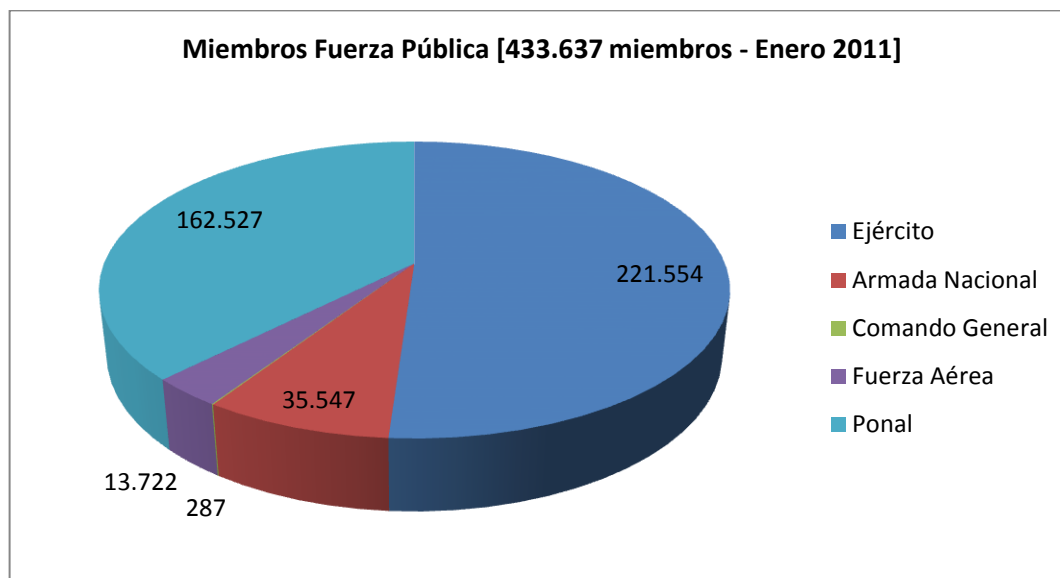


Gráfico 2. Miembros Fuerza Pública. **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa Nacional (2011, p. 77)

Precisamente, es en función de la necesidad de la profesionalización y modernización que se ha ejecutado el presupuesto. La tabla 2 evidencia que los rubros donde se presentan mayores gastos es en los de personal, y solo hasta 2008 la inversión supera los gastos generales.

Año	Personal	Generales	Transferencias	Inversión	Total
2001	1.190.020	363.962	74.658	315.608	1.944.247
2002	1.373.480	434.806	79.861	449.210	2.337.357
2003	1.573.533	610.703	155.223	293.633	2.633.092
2004	1.781.781	754.711	201.326	353.438	3.091.257
2005	2.002.567	744.483	139.028	299.799	3.185.857
2006	2.214.961	866.231	149.377	558.123	3.788.692
2007	2.484.328	927.954	205.099	480.953	4.098.334
2008	3.142.281	983.362	177.269	1.173.555	5.476.467
2009					5.698.250

Tabla 2. Presupuesto 2001-2009 (ejecutado hasta el año 2008). **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa Nacional

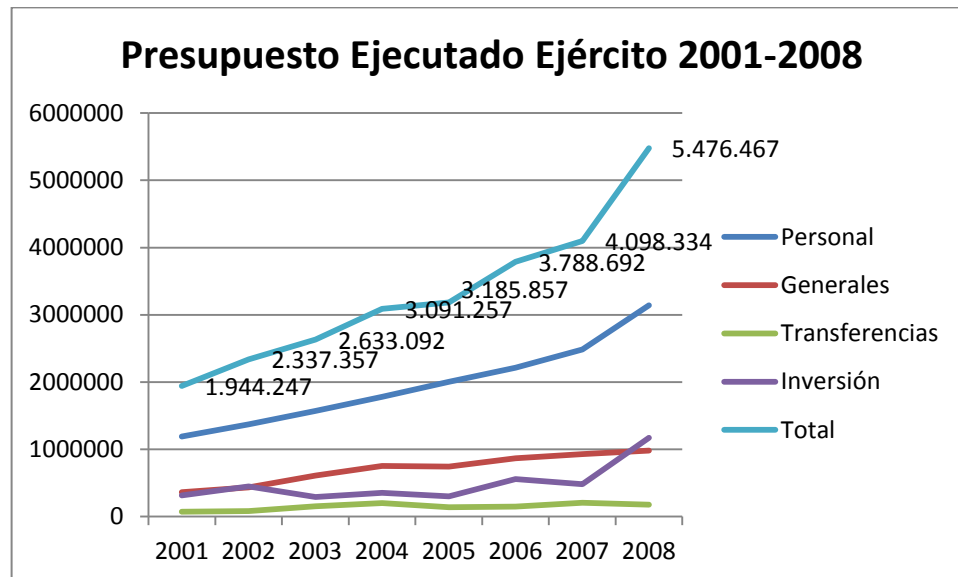


Gráfico 3. Presupuesto Ejecutado del Ejército 2001-2008. **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa nacional.

De esta forma, es entre el año 2007 y 2008, en respuesta a las necesidades de la PCSD, que el gasto aumentó de \$4.098.338.000 millones de pesos a 5,4 billones. Un aumento aproximado de 1.300 millones de pesos (véase Gráfico 3). Tal inversión no fue en vano si se tiene en cuenta el aumento de más de cinco mil soldados profesionales⁹ entre los dos años, un ascenso considerable desde que la PDSO aumentara el número de estos de 21.908 en 2002 a 59.460 en 2003. Además, cabe destacar que entre 2009 y principios de 2011, la suma de soldados regulares y bachilleres se redujo mientras que la cifra de soldados profesionales va en aumento.

⁹El aumento del presupuesto para el Ejército era además necesario si se tiene en cuenta que un soldado profesional, según Villamizar y Espejo (2005), significa un esfuerzo presupuestal de 20 millones anuales frente a un soldado regular para el cual tan solo son necesarios 10 millones.

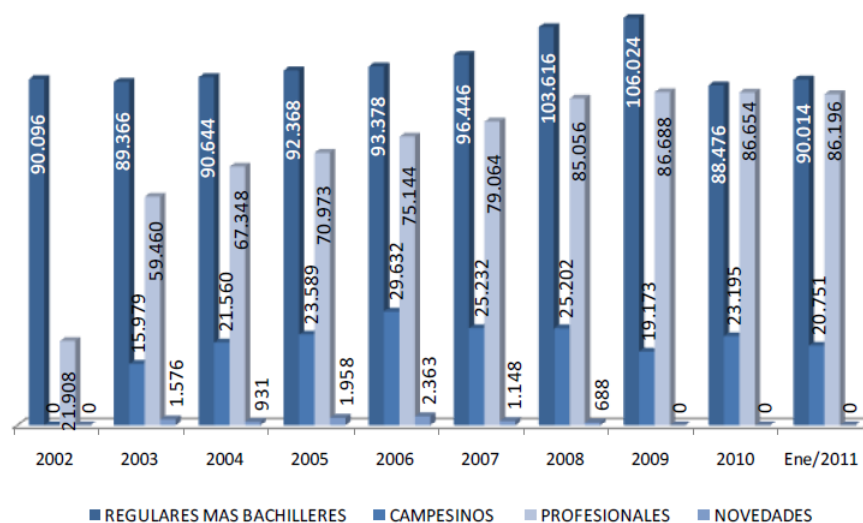


Grafico 4. Soldados Fuerzas Militares. **Fuente:** (Ministerio de Defensa Nacional, 2011, p. 79)

Por otra parte, el aumento en la inversión responde a lo establecido en el documento CONPES a partir del cual, durante el último cuatrienio de la administración Uribe, se destinaría cerca del 39,23% (p. 9) del presupuesto para el Ejército, siendo este la unidad ejecutora con mayor participación. El porcentaje se utilizó de acuerdo a las necesidades, establecidas en programas específicos, de fortalecimiento de las capacidades estratégicas (aérea, terrestre y naval), del sistema de Comando y Control, de inteligencia, dotación de munición y explosivos, la potenciación del Desarrollo Humano Integral, y el mejoramiento de la infraestructura física.

Gracias a todo esto, desde el año 2007, no solo los resultados operacionales fueron más contundentes en materia de neutralización (véase Tabla 3), sino que se avanzó a paso firme en la lucha contra el problema mundial de las drogas, y se produjeron operaciones específicas sorprendentes que debilitaron considerablemente al narcoterrorismo y demostraron que un ejército fortalecido institucionalmente, en materia de modernización y profesionalización, son garantía de eficiencia y eficacia.

Neutralizaciones	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	ene-11	
Capturas miembros GAI	3.763	7.385	6.271	5.137	4.927	3.366	2.483	2.252	1.785	83	
Abatidos miembros GAI	1.690	1.966	1.966	1.870	2.165	2.067	1.184	584	507	19	
Desmovilizados miembros GAI	1.412	1.846	1.703	1.468	1.990	3.037	3.461	2.638	2.381	164	Total 2002-2011
Total Neutralizados Miembros GAI	6.865	11.197	9.940	8.475	9.082	8.470	7.128	5.474	4.673	266	71.570
Capturas BACRIM						2.117	2.087	2.843	3.440	116	
Abatidos BACRIM						636	375	51	48	1	Total 2007-2011
Total Neutralizados BACRIM						2.753	2.462	2.894	3.488	117	11.714
Total Neutralizados GAI y BACRIM											83.284

Tabla 3. Neutralizaciones. **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa Nacional (2011, pp. 58-59)

Ciertamente, debido a los golpes certeros que se vienen presentando en contra de las estructuras altas y medias del narcoterrorismo, fue que las BACRIM intentaron hacerse con el control de las actividades delictivas que dejaban las organizaciones narcoterroristas, por tal motivo desde 2007 toda la Fuerza Pública empezó a combatir la amenaza emergente. Por lo tanto, el número de neutralizaciones de estas agrupaciones aumentó de manera considerable (véase gráfico 5), mientras se presentaba el aumento de las desmovilizaciones de los grupos al margen de la ley.

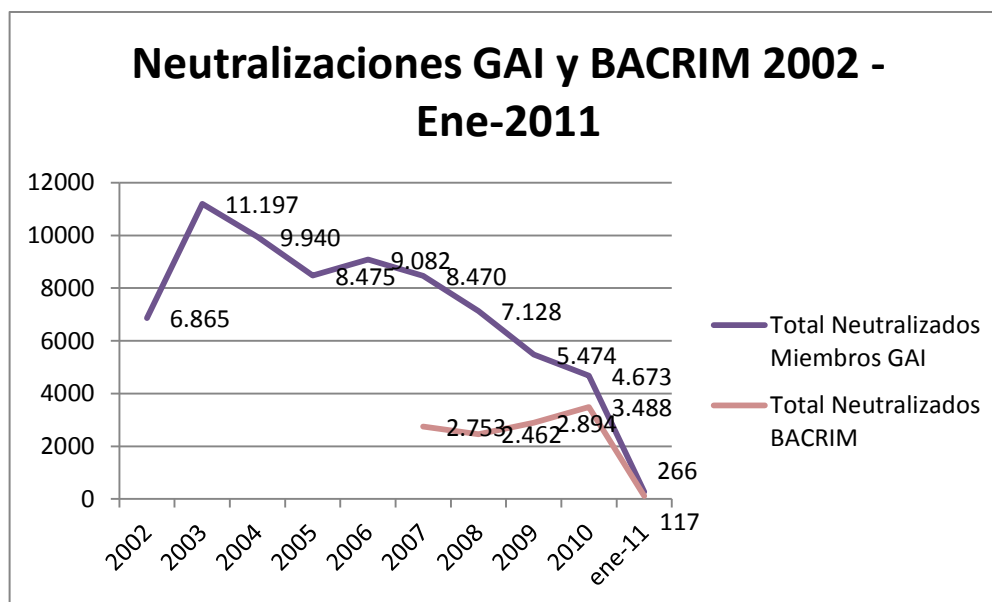


Gráfico 5. Neutralizaciones de miembros GAI y BACRIM. **Fuente:** Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Defensa Nacional (2011, pp. 58-59).

Por su parte, operaciones como “Jaque”, “Camaleón”, y “Sodoma”, dejaron en alto la labor de todas las Fuerzas Militares. En la primera de estas fue el Ejército quien liberó a Ingrid Betancourt, a los tres norteamericanos, y a 11 miembros más de la Fuerza Pública. En Camaleón, la operación conjunta de las Fuerzas Armadas lograron la liberación del general Luis Herlindo Mendieta Ovalle y el coronel Enrique Murillo. Y, en la operación “Sodoma”, que abatió a alias el “Mono jojoy”, el número uno del brazo terrorista de las Farc, se evidenció el progreso en la coordinación interinstitucional de toda la Fuerza Pública que atacó un campamento del Bloque Oriental, en la región de la Macarena, departamento del Meta. El éxito de todas estas acciones puede leerse como un acierto a la hora de prever las pautas de fortalecimiento de toda la Fuerza Pública desde la PCSD.

100 días después de la posesión del gobierno Santos, los éxitos siguen presentándose. La operación “Fortaleza II”, en coordinación entre Fuerzas Militares y la Policía Nacional, asestó un duro golpe contra el frente 48 de las Farc: 22 guerrilleros fueron dados de baja entre ellos Sixto Antonio Gullén alias “Domingo Biohó”, integrante del Estado Mayor del bloque sur de la organización narcoterrorista, quien era requerido en extradición por Estados Unidos y quien tenía circular Roja de la Interpol por terrorismo, extorsión y lesiones con fines terroristas. (Ministerio de Defensa Nacional, 2010a, p. 48)

En cuanto al problema mundial de las drogas ilícitas, el fortalecimiento de las capacidades del Ejército como del resto de la Fuerza Pública desde la PCSD permitió logros importantes. Fue así como se logró un descenso considerable en el número de cultivos de coca (de 98.899 en 2007 a 68.025 en 2009), así como un ascenso en las toneladas incautadas de cocaína (de 127,9 en 2007 a 203,9 en 2009), en el número de kilogramos de heroína incautada (de 548 en 2007 a 737 en 2009), y una variación relativa en el número de laboratorios destruidos (3046 en 2007, 3675 en 2008, 3005 en 2009, 2530 en 2010) lo que deja entrever una aparente disminución dado el mayor control territorial que tiene hoy el Estado y el enfrentamiento decidido en contra de las BACRIM. (Ministerio de Defensa Nacional, 2011, pp. 41-52)

Además, no es para nada despreciable el golpe que dio la operación “Cuenca del Pacífico” en la que se incautaron 120 millones de dólares y 17 millones de euros (incautación más grande de dinero en toda la historia de la lucha contra el narcotráfico), quebrando el sistema financiero de una organización criminal “que estaba monopolizando el tráfico de

cocaína entre [Colombia, México y Estados Unidos]” (Ministerio de Defensa Nacional, 2010a, p.19). Anexo a esto se debe señalar que 100 días después del 7 agosto de 2010 se habían incautado 45 toneladas de cocaína y destruido 501 laboratorios para su producción.

En todo su conjunto, es muy difícil determinar logros específicos para el Ejército. Sin embargo, este documento señala que, desde 2007, en función de este pilar se encuentra también el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones de seguridad y defensa que resulta en avances inconmensurables en contra de los GAI, las BACRIM, y la lucha contra el narcotráfico. Esto debe leerse como un progreso dentro del fortalecimiento institucional en el que el desarrollo de operaciones conjuntas, a partir del fortalecimiento de todo el sector defensa por medio del documento CONPES 3460, generan una fortaleza de todas y cada una de las instituciones de la Fuerza Pública. Esto es apenas lógico para la actual administración que considera como una prioridad la continuidad en la modernización del sector defensa y seguridad, para consolidar la seguridad y la lucha contra los GAI (Ministerio de Defensa Nacional, 2010a, p.39)

c) Bienestar

Desde el año 2002, se ha generado un aumento en el Bienestar para todos los integrantes de la Fuerza Pública. Los principales avances que pueden mencionarse son:

1. La asignación del retiro para soldados profesionales, que no gozaban de tal beneficio antes de 2004.
2. La reducción del requisito de servicio del 75% al 50% para acceder a pensión de invalidez para todos los miembros de la Fuerza pública.
3. La reducción de descuentos para la asignación de retiro. Se redujo del 8% del salario básico al 5% del sueldo devengado.
4. La bonificación de orden público para soldados profesionales. Desde 2006, se reconoce tal bonificación del 5% sobre el salario básico con un aumento gradual del 5% hasta llegar al 25% en 2010.
5. El aumento en la prima de actividad. Desde 2007, para oficiales, suboficiales y personal civil de la fuerza pública del 33% al 50% sobre el salario básico.
6. El subsidio de vivienda para soldados profesionales. Desde 2006, para quienes contaban con 15 años o mas de servicio por un monto de 23 SMLMV y desde 2009

el monto asciende a 41 SMLMV. Entre 2007 y 2009 se reconocieron 2.500 subsidios de vivienda para Soldados e Infantes Profesionales por un total de 28.000 millones de pesos.

7. Sanidad. En los últimos años se ha intentado fortalecer la sanidad de los miembros y familias de la Fuerza Pública mediante proyectos en Tolemaida, Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá, así como a través de la modernización del hospital Militar.
8. Los nuevos beneficios en vivienda. La ley 1305/2009 estableció avances en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía como la posibilidad de retirar ahorros con 8 años de servicio, la extensión del fondo de solidaridad a afiliados retirados por discapacidad y familiares de uniformados fallecidos, la afiliación de soldados e infantes pensionados por invalidez, la oportunidad de vinculación a la caja después de retirarse, el otorgamiento de subsidios para soldados regulares o auxiliares de policía fallecidos y discapacitados, y la acumulación de aportes de afiliados que sean pareja.
9. Los convenios para descuentos en recreación, esparcimiento, comidas, hoteles, pasajes, educación, vehículos, y facilidades de crédito mediante convenios suscritos por la Dirección de Veteranos y Bienestar Social del Ministerio de Defensa con más de 45 empresas y entidades.

De esta manera, el Ejército se ha beneficiado de las gestiones de los últimos gobiernos que intentan promover el bienestar de los integrantes de la Fuerza Pública. Ha sido sobretodo desde la PCSD, que los beneficios han venido en aumento, y no hay razón para pensar que esto vaya a cambiar con la PIDSP. En el periodo de la administración Santos, se destacó como un logro el Convenio de Cofinanciación por 25.602 millones para diseñar y construir el Centro de Rehabilitación Integral. El Centro intentará mejorar la calidad de atención en salud al personal de toda la Fuerza Pública en situación de discapacidad (Ministerio de Defensa Nacional, 2010a, p.35).

Todos estos avances en el bienestar social para los miembros del Ejército se llevan a cabo con el propósito de garantizar la cobertura y calidad. Así, el Ministerio de Defensa Nacional ha comprendido que el mejoramiento de la calidad de vida es fundamental si se desea mantener una Fuerza Pública efectiva que cuente con altos estándares de bienestar (Ministerio de Defensa Nacional, 2010a, p.34)

3. Consideraciones finales

El fortalecimiento institucional del Ejército colombiano ha dependido de tres pilares que rigen para todas las Fuerzas Militares. En primer lugar, desde la PDSD se ha entendido que un Ejército con mayor grado de legitimidad es un Ejército respetuoso de las normas de los DDHH y el DIH y que brinda seguridad para que los demás ciudadanos gocen de sus libertades. Contrario a lo que se podría pensar, las cifras no mienten. Actualmente, se trabaja para controlar y judicializar las violaciones de Derechos Humanos de parte de los militares, en compañía de instituciones nacionales e internacionales, con el fin de que prevalezca la justicia. En septiembre de 2010, el representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se mostró altamente preocupado por la drástica reducción en las transferencias de investigaciones por ejecuciones extrajudiciales de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, solicitando al gobierno que se aclaren estos casos, que deben ser de conocimiento de la justicia ordinaria.

En segundo lugar, el constante mejoramiento en las capacidades del Ejército se ha entendido desde un enfoque más amplio en el que se intenta no solo mejorar los recursos estratégicos con los que se cuentan sino también a partir de la formación de soldados profesionales que generan resultados mucho más favorables y deseables. El aumento en el presupuesto para el Ejército de Colombia ha provocado resultados positivos que se comprueban con la reducción sustancial de la amenaza narcoterrorista, así como en las cifras que intentan medir los avances en la lucha contra las BACRIM. Sin embargo, el desafío actual es lograr que su capacidad se mantenga y se adapte a las exigencias de un nuevo escenario estratégico que requiere de una mayor coordinación entre toda la Fuerza Pública.

En tercer lugar, un Ejército vigorizado necesita de la continuidad y la mejora en los servicios de bienestar para garantizar que el trabajo se realice con entusiasmo y las acciones heroicas aumenten.

Así como los escenarios cambian, el fortalecimiento institucional debe adaptarse también. El reto para la administración del actual presidente es el fortalecimiento de algunas áreas que no se han tenido en cuenta como la consolidación de un Ejército capaz de ser oferente de cooperación de calidad en la arena internacional desde su experiencia, así como el fortalecimiento de un Grupo Empresarial y Social de la Defensa capacitado para responder a las necesidades internas como complemento de la labor que se adelanta. Esto

porque, en últimas, un Estado seguro es función de una buena comprensión de los elementos en los que radica la fortaleza de la institucionalidad de su propio Ejército.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comision Colombiana de Juristas. (29 de 06 de 2011). *Comisión Colombiana de Juristas*. Recuperado el 28 de 07 de 2011, de http://www.coljuristas.org/documentos/cifras/cif_2011-06-06.html

Consejo Nacional de Política Económica y Social . (Febrero de 2007). *CONPES 3460. Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad*. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de Sitio web del Ministerio de Defensa Nacional: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas2/anexos/7714_CONPES_3460.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2011). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad*. Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Desarrollo.

Farfán, G. (2007) El nuevo institucionalismo histórico y las políticas sociales. En: Polis 2007, 3, 1 (Recurso electrónico). Última consulta: Febrero 27 de 2010.

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006) Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill: México D.F

Losada, R. y Casas, A. (2008) Enfoques para el análisis político. Pontifica Universidad Javeriana: Bogotá D.C.

Ministerio de Defensa Nacional. (2008). *Política integral de DDHH y DIH*. Bogotá D.C.: Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Defensa Nacional. (2009a). *Gasto en Defensa y Seguridad 1998-2011*. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de Sitio web del Ministerio de Defensa Nacional: <http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf>

Ministerio de Defensa Nacional. (2009b). *La fuerza pública y los retos del futuro*. Bogotá D. C.: Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Defensa Nacional. (2010a). *100 días*. Bogotá D.C.: Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Defensa Nacional. (2010b). *Avance en el cumplimiento de las 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional. Noviembre 2008 - Abril 2010*. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de Sitio web del Ministerio de Defensa Nacional: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Asuntos_de_Interes/Derechos_Humanos/docs_nweb/Avances_Caso_Soacha.pdf

Ministerio de Defensa Nacional. (2010c). *Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática - PCSD*. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de Sitio web del Ministerio de Defensa Nacional: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionales/Logros%20de%20Politica%20CSD%20Mayo%202010.pdf

Ministerio de Defensa Nacional. (2010d). *Protegiendo derechos. Acciones y resultados del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública para fortalecer la protección de los derechos humanos 2002-2010*. Recuperado el 2011 de Marzo de 10, de Sitio web del Comando General de las Fuerzas Militares: http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/Boletin_resultados_DDHH_2002-2010.pdf

Ministerio de Defensa Nacional. (2011). *Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad*. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de Sitio Web del Ministerio de Defensa Nacional: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros%20de%20Politica%20CSD%20Dic%202010.pdf

Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia. (2007). *Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)*. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional.

Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia. (2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Bogotá: Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional.

Rivera Salazar, R. (2011). *Seguridad para la Prosperidad. Camino hacia la paz y el progreso de todos*. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de Sitio web del Cuerpo de Generales y Almirantes: http://www.cga.org.co/boletin_ecos/126/2_Mindefensa.html

Vargas Velásquez, A., & García Pinzón, V. (2009). Presupuesto nacional y seguridad ciudadana en Colombia: a propósito del gasto público en seguridad y defensa y la lucha contra la violencia y el crimen. En F. Carrión M., & M. Dammert G., *Economía política de la seguridad ciudadana* (págs. 39-58). Quito: FLACSO.

Velasquez, C. A. (2006). El ámbito político en el conflicto armado con las FARC 1990-2006. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad* , 157-190.

Villamizar, A., & Espejo, G. (2005). *El gasto en seguridad y defensa en Colombia. De la contención a la ofensiva*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.